

Víctor Samuel Palma César

El paquete económico

Como sucede cada año, el periodo de sesiones del Congreso que se inaugura en septiembre se caracteriza por el debate económico vinculado a la aprobación de la ley de ingresos y al presupuesto de egresos de la Federación; sin duda otros asuntos son y deben ser abordados, pero los dos señalados concentran la atención congresional cuando menos hasta los primeros días de noviembre, máxime que el trabajo que generaba el informe presidencial al comenzar septiembre quedó en el pasado, merced a la reforma que se presentó en esta materia.

La polémica abierta por la propuesta de un nuevo impuesto del 2 por ciento al consumo de bienes y servicios, considerados en él los alimentos y las medicinas, se presenta como el punto nodal. Con tal impuesto se estima una recaudación de 77 mil millones de pesos que se pretende etiquetar al programa Oportunidades de combate a la pobreza, así como otra parte a estados y municipios. En contraparte, se postula una reducción del gasto a partir de la eliminación de tres secretarías: la de la Reforma Agraria, la de Turismo y de la Función Pública, a las que se le suman limitaciones de gasto por concepto de la fusión de la Lotería Nacional y de Pronós-

ticos Deportivos y de las embajadas, entre otros conceptos, lo que en suma plantea una contracción en el gasto programable del orden de los 218 mil millones de pesos.

En primera instancia, es de mencionarse que la propuesta del paquete económico resultó sorpresiva, ya que no fue delineada como tal en el mensaje del presidente con motivo de su Tercer Informe de Gobierno; este aspecto es relevante, puesto que el discurso presidencial fue orientado a la formulación de una refle-

xión estratégica para la realización de los cambios necesarios en el país, así como a un exhorto para que la sociedad y el Estado hicieran una alianza en torno de ello. La omisión es difícil de explicar, pues implica un olvido que sería injustificable o una elusión que no se alcanza a comprender si, como lo es, estamos en un contexto de intenso debate y pluralidad para la aprobación de las políticas públicas, en donde la contribución y concurso del jefe del Gobierno resulta fundamental.

Puede decirse que difícilmente alguien se opondrá a las medidas de racionalidad y de austeridad; sin embargo, su reflejo en el gasto programable no queda claro pues en este rubro se plantea un incremento importante entre lo propuesto para 2010 y lo aprobado en 2009; además, la forma de realizar el "recorte" no aparece vinculada a la manera en cómo se llegó a su paulatino pero consistente incremento por la vía de ir creando subsecretarías o equivalentes y direcciones generales o similares en números que resultan escandalosos, pues se trata de 79 en el primer caso y de alrededor de 300 para el

segundo. En este asunto, el gobernador de Veracruz Fidel Herrera hace un planteamiento que tiene tiempo de formularse consistente en la desaparición de las delegaciones federales que, de practicarse, significaría una eliminación de 233 mil millones de pesos, al tiempo que permitiría una positiva reformulación de las relaciones entre la Federación y los estados de la República a favor de apoyar la capacidad y gestión de los primeros.

Por otra parte, los mecanismos de combate a la pobreza están a discusión pues no han dado los resultados que de ellos se esperaba, como lo demuestra el incremento en el número de pobres, de lo cual dan cuenta las mediciones reconocidas que últimamente se practicaron en este renglón. De ahí que la justificación del nuevo impuesto para concentrar recursos en el programa Oportunidades no resulta del todo convincente. Como se verá, la polémica sobre el paquete económico del gobierno tiene un amplio debate pendiente. ☒

victorsamuelp@yahoo.com.mx

Político miembro de PRI

